



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, diecinueve (19) de agosto de dos mil veintidós (2022)

REFERENCIA:	PROCESO ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE:	ALBERTO CARDONA JARAMILLO
DEMANDADO:	GABRIEL JAIME, DAVID ALBERTO Y RICARDO LEÓN RUIZ JARAMILLO como representantes de la sucesión de MARIA IRMA JARAMILLO
RADICADO:	050013105 013 2021 00359 01
ACTA No	54

Sería del caso que la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín conformada por los Magistrados **ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN y MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**, procedería a pronunciarse en virtud del recurso de apelación frente al auto que negó decretar la medida cautelar, pero al asumir el estudio se advierte una causal de nulidad.

La Magistrada del conocimiento, doctora Ana María Zapata Pérez, declaró abierta la audiencia. A continuación, la Sala, previa deliberación sobre el asunto, como consta en el **acta 54** de discusión de proyectos, adoptó el presentado por la ponente, el cual quedó consignado en los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES

Junto con la demanda se radicó solicitud de medida cautelar con la que pretende el embargo de crédito hipotecario constituido mediante escritura pública del 19 de junio de 2002 sobre la matrícula inmobiliaria 001-49587¹.

Con auto del **19 de agosto de 2021**² se rechazó la medida cautelar, argumentándose su improcedencia en el procedimiento declarativo laboral; decisión que no fue recurrida por el interesado. En escrito que adecuó la demanda para la admisión, la parte actora insistió en la medida cautelar³.

¹ PDF 02 de la carpeta de primera instancia, página 12.

² PDF 04 de la carpeta de primera instancia.

³ Páginas 2 y 3 del PDF 06 de la carpeta de primera instancia. Data del 23 de agosto de 2021.

Con escrito del 22 de septiembre de 2021 solicitó nuevamente la medida cautelar⁴, a lo que con auto escrito del 30 de septiembre de 2021, teniendo el escrito del apoderado como recurso de reposición contra la anterior decisión, no se accedió reponer y ordenó continuar el trámite del proceso⁵.

Luego, con memorial denominado "Solicitud inscripción demanda", el apoderado manifestó que la administración de justicia es un derecho fundamental y es para el Estado una obligación suministrarla, siendo deber del juez tomar las medidas necesarias y conducentes para el cumplimiento de los fallos judiciales, citando para este efecto apartados de doctrina sobre las medidas cautelares⁶.

Así, mediante auto del **7 de junio de 2022**⁷ nuevamente se negó la medida cautelar mediante providencia escrita, argumentando que las medidas invocadas por el actor de inscripción de la demanda y embargo no son aplicables en el trámite laboral en los procesos declarativos, siendo solo procedentes las del **literal C del artículo 590 del CGP** como parte de la interpretación de las medidas dispuestas en el artículo 85 A del CPTSS.

Inconforme con la decisión, se interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación⁸ en el que argumentó: **i)** El objeto del juicio es determinar la cuota o parte que corresponde al abogado en el resultado del juicio, reconocimiento de mejoras y demás según las providencias ejecutoriadas; **ii)** Explicó la figura de la cuota Litis en civil, para señalar que los derechos del apoderado se refieren al bien liberado y reconocido como propiedad de los mandantes, es una cuota o parte del bien litigioso; **iii)** Que obtenida la sentencia, el 30% de propiedad del bien corresponde al abogado. Cita apartados doctrinales sobre la inscripción de la demanda, para señalar que se trata de una medida de seguridad jurídica; **iv)** Aduce que los demandados tienen inscritas las mejoras en el folio de matrícula inmobiliaria. Sin la actuación del apoderado las mejoras hubieran sido rematadas para el pago de tres hipotecas que en él aparecen inscritas.

⁴ PDF 09 de la carpeta de primera instancia.

⁵ PDF 10 de la carpeta de primera instancia; en la misma decisión llamó la atención de la parte actora sobre la relevancia del principio de preclusión señalando que si el tema se había decidido previamente, debía el apoderado interponer los recursos para plasmar su disenso.

⁶ PDF 32 de la carpeta de primera instancia. Data del 3 de junio de 2022.

⁷ PDF 33 de la carpeta de primera instancia.

⁸ PDF 35 de la carpeta de primera instancia.

Finalmente, con providencia escrita del pasado **26 de julio**⁹ la Juez decidió no reponer el auto del 7 de junio de la misma anualidad y agregó que las medidas solicitadas por el demandante no hacen parte de las medidas cautelares innominadas. Señaló que, si aun en gracia de discusión se encontrara procedente la medida, ésta sería negada al no acreditarse los requisitos mínimos de la medida cautelar como lo son el folio de matrícula inmobiliaria de los bienes o mejoras que denuncia, a efectos de verificar la titularidad de derecho de quienes integran la pasiva. En consecuencia, concedió el recurso de apelación.

2. CONSIDERACIONES

Pues bien, con el trámite anterior advierte la Sala que el Juzgado de conocimiento vulneró el principio de oralidad contemplado en el artículo 42 del Código Procesal del Laboral y de la Seguridad Social. La Corte Constitucional ha analizado el principio de oralidad en materia laboral y en sentencia C-583 de 2016¹⁰ expresó:

[...] la Corte ha establecido que: (i) las medidas que adecuan los procedimientos laborales a la oralidad se desarrollan en el marco de un amplio margen de configuración por parte del legislador, (ii) en consecuencia, se debe realizar un juicio de razonabilidad frente a cada medida que, en principio debería ser ordinario (leve), salvo que existan razones para hacerlo más exigente. Y (iii) la finalidad de dar celeridad al proceso laboral mediante la oralidad, busca hacer efectivo el derecho de toda persona a acceder a una justicia sustantiva, pronta y cumplida. [...]

Resaltó la Corporación que:

La realización de los principios de celeridad, inmediatez y eficacia se buscan mediante la oralidad en los procesos laborales, debe armonizarse con las demás garantías propias de los derechos al debido proceso en el contexto laboral, a la contradicción, a la defensa, y al acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Lograr este equilibrio es parte de las funciones y competencias propias del amplio margen de configuración del legislador. Es su función adoptar las medidas adecuadas y necesarias para asegurar el derecho de toda persona a acceder a una justicia sustantiva, pronta y cumplida.

Sumado a lo anterior, la Corte Suprema de Justicia en su Sala Laboral ha señalado que bajo el sistema de oralidad, las inconformidades con las actuaciones del Juez director del proceso deben expresarse también de forma oral en la oportunidad dispuesta para ello, pues los reclamos posteriores y por escrito serán tenidos como extemporáneos¹¹.

⁹ PDF 36 de la carpeta de primera instancia.

¹⁰ MP: Aquiles Arrieta Gómez

¹¹ SL 4808 de 2021. MP: Martín Emilio Beltrán Quintero.

Ahora bien, el artículo 42 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, dispone:

ARTICULO 42. PRINCIPIOS DE ORALIDAD Y PUBLICIDAD. <Artículo modificado por el artículo 3 de la Ley 1149 de 2007. Ver artículo 15 sobre Régimen de Transición. El nuevo texto es siguiente:> **Las actuaciones judiciales y la práctica de pruebas en las instancias, se efectuarán oralmente en audiencia pública**, so pena de nulidad, salvo las que expresamente señalen la ley, y los siguientes autos:

1. Los de sustanciación por fuera de audiencia.
2. Los interlocutorios no susceptibles de apelación.
3. Los interlocutorios que se dicten antes de la audiencia de conciliación, saneamiento, decisión de excepciones y fijación del litigio y con posterioridad a las sentencias de instancias.

PARÁGRAFO 1o. En los procesos ejecutivos sólo se aplicarán estos principios en la práctica de pruebas y en la decisión de excepciones.

PARÁGRAFO 2o. El juez limitará la duración de las intervenciones de las partes y de sus apoderados, respetando el derecho a la defensa. (Negrilla intencional).

De esta disposición normativa se colige con claridad que todas las actuaciones del proceso, salvo las expresamente señaladas en la norma, deben seguir los parámetros del procedimiento general en materia laboral, es decir, **deben efectuarse oralmente en audiencia pública**. Siguiendo con este análisis, es de resaltar que las medidas cautelares se encuentran regladas en el artículo 85 A del CPTSS en los siguientes términos:

ARTÍCULO 85-A. MEDIDA CAUTELAR EN PROCESO ORDINARIO. Cuando el demandado, en proceso ordinario, efectúe actos que el juez estime tendientes a insolventarse o a impedir la efectividad de la sentencia, o cuando el juez considere que el demandado se encuentra en graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones, podrá imponerle caución para garantizar las resultas del proceso, la cual oscilará de acuerdo a su prudente proceso entre el 30 y el 50% del valor de las pretensiones al momento de decretarse la medida cautelar.

En la solicitud, la cual se entenderá hecha bajo la gravedad del juramento, se indicarán los motivos y los hechos en que se funda. Recibida la solicitud, **se citará inmediatamente mediante auto dictado por fuera de audiencia a audiencia especial** al quinto día hábil siguiente, **oportunidad en la cual las partes presentarán las pruebas acerca de la situación alegada y se decidirá en el acto**. La decisión será apelable en el efecto devolutivo.

Si el demandado no presta la caución en el término de cinco (5) días no será oído hasta tanto cumpla con dicha orden.

(Negrilla intencional)

Normatividad en la que el legislador estableció como trámite para resolver la solicitud de las medidas cautelares, el de una **audiencia especial en la que las partes presentarán las pruebas sobre lo alegado en la solicitud** y allí se proferirá la decisión; audiencia sujeta al **principio de oralidad** de la especialidad laboral.

Ahora bien, mediante sentencia **C-043 de 2021**¹² la Corte Constitucional al abordar el análisis de las medidas cautelares en materia laboral y la desigualdad entre el régimen de estas medidas entre el CPTSS y el CGP¹³ a través de un examen minucioso, expuso la posición de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia sobre la aplicación del artículo 590 del CGP en materia laboral, para concluir que sí existe un trato diferenciado en la especialidad laboral adelantando entonces un juicio integrado de igualdad de nivel intermedio, en el que concluyó la Corporación:

En tal sentido, la Sala considera que existe otra interpretación posible de la norma acusada que permite garantizar el derecho a la igualdad de los justiciables del proceso laboral y también superar el déficit de protección evidenciado. Consiste en sostener que el art. 37A de la Ley 712 de 2001 sí admite ser complementado por remisión normativa a las normas del CGP, dado que el primero no contempla una disposición especial que proteja preventivamente los derechos reclamados en aquellos eventos donde la caución es inidónea e ineficaz. Aplicación analógica que procede únicamente respecto del artículo 590, numeral 1º, literal “c” del estatuto procesal general, es decir, de las medidas cautelares innominadas [...]

Y más adelante explicó:

Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte declarará exequible de forma condicionada el artículo 37A de la Ley 712 de 2001, en el entendido **según el cual en la jurisdicción ordinaria laboral pueden invocarse medidas cautelares innominadas, previstas en el literal “c” del numeral 1º del artículo 590 del CGP.**

Dicho literal establece, principalmente, que se puede aplicar cualquier otra medida que el juez encuentre razonable para la protección del derecho objeto de litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de la pretensión. Para decretar la medida cautelar el juez apreciará, entre otras

¹² MP. Cristina Pardo Schlesinger. Sentencia del 25 de febrero de 2021.

¹³ La Corte estableció como problema jurídico: *Los demandantes plantean que en la jurisdicción ordinaria hay un trato desigual hacia los justiciables que acuden a la especialidad laboral y solicitan medidas cautelares en comparación con quienes hacen lo mismo en la especialidad civil. Sostienen que los primeros tienen un régimen de medidas cautelares desventajoso (art. 37A de la Ley 712 de 2001) en comparación con los segundos (art. 590 CGP). En esa medida, resaltan que en la especialidad laboral se busca la protección de derechos como el trabajo y la seguridad social, cuya materialización no estaría garantizada por contar el proceso laboral con una sola medida cautelar para ello.*

situaciones, la legitimación o interés para actuar de las partes y la existencia de la amenaza o la vulneración del derecho.

Conforme lo decidido por la Alta Corporación, si bien resulta procedente aplicar las medidas cautelares innominadas consagradas en el literal C del artículo 590 del CGP en materia laboral, en todo caso su trámite debe ceñirse a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 85 A del CPTSS, pues lo que se busca es garantizar el derecho a la igualdad en la especialidad laboral, sin que en manera alguna resulte procedente concluir, que hubiese sido intención de la Alta Corporación que en relación con estas medidas cautelares innominadas se omita el procedimiento referido a la audiencia especial consagrada en la norma procesal laboral.

En el caso bajo estudio, se observa que la parte actora solicitó en múltiples oportunidades medidas cautelares de embargo e inscripción de la demanda, que fueron resueltas negativamente por el Juzgado mediante providencias escritas. Y conforme el análisis precedente, a juicio de esta corporación el pronunciamiento de fondo sobre la procedencia de las medidas cautelares solicitadas debió hacerse en el marco de la audiencia pública especial, en aras de garantizar los postulados del procedimiento laboral que se materializan a través del principio de oralidad que rigen las actuaciones en este procedimiento y además en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 85 A del CPTSS, **para darle oportunidad a las partes de que presenten las pruebas sobre la situación alegada** y a partir de tal acervo probatorio adoptar la decisión sobre la procedencia o no de la medida. La audiencia es el escenario procesal adecuado para que la A quo se entere si efectivamente el derecho objeto de litigio está en peligro y a partir de allí tomar una decisión en los términos expuestos en la sentencia **C-043 de 2021**.

En ese orden de ideas, al pretermitir la audiencia especial que permite a las partes presentar las pruebas se presenta en este caso la causal de nulidad específica prevista en el artículo 42 del Código Procesal Laboral que propende por la garantía del debido proceso constitucional consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, por lo que se impone declarar la nulidad **del auto del 7 de junio de 2022**¹⁴.

¹⁴ PDF 33 de la carpeta de primera instancia.

Sin costas en esta instancia.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Sexta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE:**

PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD del auto del 7 de junio de 2022, para que en su lugar se resuelva la solicitud de medidas cautelares en audiencia especial de conformidad con el **inciso segundo del artículo 85 A del CPTSS.**

SEGUNDO: Sin **COSTAS** en esta instancia.

TERCERO: Se ordena la devolución del expediente digitalizado con esta actuación al Juzgado de origen para el trámite pertinente.

Los Magistrados,



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
estados N ° 147 del 22 de agosto de 2022.

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/130>



RADICADO: 050013105 013 2021 00359 01

AUTO del //19/08/2022

Con este código puede acceder a la actuación de segunda instancia,
para ello debe tener una cuenta de Microsoft.

Enlace en caso de no tener lector QR: https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/des06sltsmed_cendoj_ramajudicial_gov_co/EpdITUN5AsxLiXfNDhiWGF4BgLzRzHCQNo62K4Gntb04LQ?e=6rsuX3